

**RESOLUCION de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales por la que se adjudican por el sistema de concurso-subasta las obras comprendidas en el expediente número 8-B-1.051. 8-B-1.055-11.11/69.**

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 15 de abril de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas en el expediente número 8-B-1.051, 8-B-1.055-11.11/69, Barcelona.

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo señor Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provisional efectuada por la Junta de Contratación, se adjudican definitivamente las siguientes obras:

Barcelona: «Iluminación de la autopista Barcelona-Mataró. Tramo, plaza de las Glorias y de la plaza de las Glorias a Badalona.»

A «Benedicto y Redondo, S. A.», e «Ignacio Soria, S. A.», conjunta y solidariamente en la cantidad de 14.400.000 pesetas, que produce en el presupuesto de contrata de 26.378.489 pesetas un coeficiente de adjudicación de 0.545899350.

Madrid, 21 de abril de 1969.—El Director general, Pedro de Areatio.

**RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se acuerda la revisión de características y subsiguiente cancelación de una inscripción a favor de don Joaquín de Arteaga y Echagüe, Marqués de Santillana, con aguas del río Guadarrama, en término municipal de Torrelodones (Madrid).**

Por la Comisaría de Aguas del Tajo se acordó con fecha 12 de enero de 1963 iniciar expediente de revisión de características de un aprovechamiento inscrito en el Registro de aprovechamientos de aguas públicas, a favor de don Joaquín de Arteaga y Echagüe, Marqués de Santillana, en el río Guadarrama, término municipal de Torrelodones, con destino a serrería mecánica, según concesión otorgada el 9 de abril de 1872.

A este fin se ha completado la información municipal sobre el domicilio del titular e identificación del aprovechamiento, con una información pública en el «Boletín Oficial del Estado» y de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento, únicos medios para ponerse en contacto con el titular, ya que se desconoce su domicilio y paradero, que por ello no puede alegar idiosincrasia por este motivo, máxime cuando ha cambiado la propiedad de la finca y se desconoce el domicilio de la actual propietaria, de la que únicamente se conoce el nombre y su residencia en Mérida.

No se ha podido comprobar la existencia del aprovechamiento ni localizado el sitio donde el mismo había de ubicarse, esta situación de abandono debe ocasionar al menos para el titular la pérdida de la protección del Registro, ya que éste únicamente debe amparar a aquellos aprovechamientos que son real y efectivamente utilizados, por lo que esta Dirección General ha resuelto ordenar la cancelación de la inscripción practicada a nombre de don Joaquín de Arteaga y Echagüe, Marqués de Santillana, con destino a una serrería mecánica de minerales en el río Guadarrama, término municipal de Torrelodones (Madrid), según concesión de 9 de abril de 1872, cancelación que se practicará una vez que transcurra el plazo de un mes desde la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el artículo primero de la Orden ministerial de 29 de abril de 1967.

Lo que se hace público para su debido conocimiento, significándose que contra la presente Resolución cabe recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Obras Públicas en el plazo de quince días, a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Dios guarde a V. S.

Madrid, 19 de diciembre de 1968.—El Director general, P. D., el Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Tajo.

**RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace pública la declaración de caducidad de las concesiones otorgadas a doña Antonia de Córdoba-Benavente y doña Concepción Martín de Córdoba-Benavente de aguas del río Guadajoz, en término de Córdoba.**

En el expediente instruido con motivo de la caducidad de las concesiones otorgadas a doña Antonia de Córdoba-Benavente y doña Concepción Martín de Córdoba-Benavente, de sendos aprovechamientos de aguas derivadas del río Guadajoz,

en término municipal de Córdoba, este Ministerio, de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado, en sesión celebrada el 20 de febrero de 1969, ha resuelto:

Declarar la caducidad de las concesiones otorgadas a doña Antonia de Córdoba-Benavente y doña Concepción Martín de Córdoba-Benavente, de sendos aprovechamientos de aguas derivadas del río Guadajoz, en término municipal de Córdoba.

Lo que de Orden ministerial comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 3 de marzo de 1969.—El Director general, por delegación, el Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Guadalquivir.

**RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que se hace pública la autorización otorgada a don Máximo Aramburu Iturbe para cubrir un tramo de la regata Iturri-Choko, en el término municipal de Anoeta (Guipúzcoa).**

Don Máximo Aramburu Iturbe ha solicitado autorización para cubrir un tramo de la regata Iturri-Choko, en el término municipal de Anoeta (Guipúzcoa); y

Este Ministerio ha resuelto:

Autorizar a don Máximo Aramburu Iturbe para cubrir un tramo de la regata Iturri-Choko, en el término municipal de Anoeta (Guipúzcoa), con sujeción a las siguientes condiciones:

1.ª Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que sirvió de base al expediente, suscrito en San Sebastián, en julio de 1966, por el Ingeniero de Caminos don Francisco Miner Urdampilleta y visado por el Colegio correspondiente, por un presupuesto de ejecución material de 594.650,62 pesetas, en tanto no resulte modificado por las presentes condiciones; las modificaciones de detalle que se pretendan introducir podrán ser autorizadas por la Comisaría de Aguas del Norte de España, siempre que no se alteren las características esenciales de la autorización, lo cual implicaría la tramitación de nuevo expediente.

Se colocará un registro sobre la tajea de cubrimiento y en su punto medio que permita la limpieza de ésta.

2.ª Las obras deberán quedar terminadas en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de publicación de la autorización en el «Boletín Oficial del Estado».

3.ª Las embocaduras de entrada y salida de la zona cubierta se dispondrán con sus impostas en forma de que ofrezcan el mínimo obstáculo a la circulación de avenidas catastróficas.

4.ª La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante la construcción como durante la explotación de las mismas, quedarán a cargo de la Comisaría de Aguas del Norte de España, siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, con sujeción a las disposiciones que le sean aplicables y en especial al Decreto número 140, de 4 de febrero de 1960, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del principio de los trabajos. Una vez terminados estos, y previo aviso del concesionario, se procederá a su reconocimiento final por el Comisario Jefe de Aguas o Ingeniero del Servicio en quien delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, así como las pruebas de resistencia pertinentes y extensión de la superficie ocupada en metros cuadrados, más los nombres de los productores españoles que hayan suministrado los materiales empleados, debiendo ser aprobada el acta por la Dirección General.

5.ª Se concede autorización para la ocupación de los terrenos de dominio público necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

No se construirá edificio alguno sobre la zona que pertenece al dominio público, la que no perderá su carácter demanial. Las edificaciones que se construyan a uno y otro lado de la misma deberán permitir, en todo caso, el desagüe al río de los caudales que por la obstrucción o por cualquier insuficiencia de la obra puedan producir daños.

6.ª Se concede esta autorización por un periodo de noventa y nueve años, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, quedando obligado el concesionario a demoler o modificar, por su parte, las obras, cuando la Administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna, no pudiendo dedicarlas a fines distintos de los que se especifican en el expediente, ni transferidas sin la previa aprobación del Ministerio de Obras Públicas.

7.ª El concesionario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social.

8.ª El concesionario será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o privados, como consecuencia de las obras autorizadas, quedando obligado a su indemnización.